

junto de mensajes que el resto reproduce con pequeñas variaciones. El punto de partida de los flujos lo constituye el programa de radio y televisión *Aló presidente*, la cuenta de twitter #chavezcandanga, y la columna dominical "Las líneas de Chávez". A ellos se integran la Agencia Bolivariana de Noticias, encargada de dar cobertura a las informaciones de origen oficial que luego son difundidas inalteradas a todo el país por los numerosos medios integrados a la red. Simultáneamente, la Villa del Cine produce las películas que van a los medios audiovisuales. ANTV cubre de manera exclusiva para televisión el trabajo parlamentario, mientras ViveTV y Ávila TV operan como resumen de las señales comunitarias. Telesur realiza la difusión internacional de todo lo anterior, al tiempo que su red de corresponsales extranjeros se encarga de incorporar al dispositivo el panorama internacional. El diario VEA, el portal electrónico Aporrea.org y los demás impresos ofrecen material para complementar los contenidos de radio y televisión. TVES, el canal que sustituyó la señal de Radio Caracas Televisión, se encarga de producir los nuevos programas de entretenimiento audiovisual de la revolución y, finalmente, el Ministerio de Información elabora la propaganda oficial que circula por todos estos canales. Entre los portales electrónicos la interconectividad es inmediata. Cada página web y cada portal electrónico perteneciente a las instituciones del Estado posee muy visibles enlaces al centro y a los lados del dispositivo, facilitando así los flujos informativos.

A manera de cierre: nuevos paisajes, nuevos mapas de representación

¿Qué ha cambiado en el paisaje comunicacional venezolano durante la última década? Pues bien, comencemos por

observar que el terreno en el que coexistían un preponderante conglomerado empresarial dedicado a la producción y venta de contenidos para el entretenimiento y la publicidad con un reducido grupo de medios estatales orientado a la promoción de la obra de los gobiernos en turno ha sufrido importantes mutaciones.

Estas mutaciones son el resultado de dos procesos fundamentales: en primer lugar, el inducido por los conflictos ocurridos en Venezuela entre finales del siglo XX y principios del XXI, generados por el derrumbe de la democracia representativa y la crisis del programa neoliberal de modernización. En segundo lugar, por la multidimensionalidad alcanzada en las últimas tres décadas por el campo comunicacional, en el marco de la fase actual de la globalización. En este contexto, la comunicación ha vivido un renovado período de protagonismo en Venezuela que ha propiciado el reordenamiento del campo de relaciones que se establecen a partir de lo comunicacional, en el que deben considerarse al menos los siguientes aspectos:

1. La transformación del campo de la comunicación de un régimen controlado por agentes privados y de carácter eminentemente comercial, a un régimen controlado por el Estado y dominado por el incesante flujo de mensajes político-ideológicos. Esta mutación comprende, por un lado, la minimización de las voces opositoras y, por el otro, la maximización de la voz del Estado en poder del gobierno.

2. Acompañando un conjunto de nuevos enunciados, verdades de fuerza y líneas de subjetivación generadas por la revolución bolivariana se ha convertido al antiguamente insignificante sector público de la comunicación en un poderoso dispositivo con características de corporación comunicacional, cuyas variadas ramificaciones se han esforzado por establecer las coinciden-

cias que permitan armonizar el discurso revolucionario con una realidad material con la cual es absolutamente incongruente.

3. Los medios de comunicación audiovisual, de suyo centrales en la esfera pública latinoamericana, como determinantes de los modos de representación política y de conformación de ciudadanía, han funcionado en Venezuela a lo largo de la última década como la pieza fundamental de un gobierno que carece de estructura de partido, y de un movimiento opositor cuyos partidos se encuentran deslegitimados políticamente. De esta forma, de la crisis del Estado producida por la ausencia de consenso político y una extrema polarización han emergido los medios como los agentes estratégicos con la capacidad suficiente para dotar a los bandos en pugna de una unidad política. De allí la visibilidad del salto de una democracia protagonizada por los partidos a una democracia protagonizada por los medios.

4. A la labor tradicionalmente desplegada por el dispositivo comunicacional como organizador de las jerarquías que regían la cultura y sus modalidades, se ha agregado en este período un agudo proceso de deslegitimación del campo de la política, al imponerse a los juegos del poder político y a la intervención en el espacio público, las estructuras, dinámicas y fórmulas de valoración propias del arte de la representación y la cultura del entretenimiento.

5. El resultado de estas luchas ha sido que los procesos de mediación política han sido asimilados al modelo de comunicación que propone fundamentalmente la televisión. De esta manera, los medios han emergido no sólo como parte de los dispositivos de poder disciplinario, sino sobre todo como el escenario de una nueva cultura, en donde las dimensiones simbólicas, rituales y teatrales que siempre tuvo la política han sido reformuladas. El poder de las imágenes se ha colocado así en el

centro de todos los procesos de la política contemporánea como el lugar privilegiado en que ésta se representa y se percibe.

6. Por último, ha sido palpable que la transformación del paisaje comunicacional operada en el marco de la revolución bolivariana no condujo a una verdadera democratización del espacio mediático, sino tan sólo a una elemental recomposición del orden hegemónico. De allí que la apropiación de los medios por parte de la llamada revolución no ha hecho más que distorsionar aún más el orden comunicacional preexistente, sin dotarlo de nada realmente novedoso, mostrando tan sólo como el movimiento liberador revolucionario devino en opresor de las libertades que profesaba.

Manuel Silva-Ferrer realizó estudios de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en Filosofía y Ciencias Sociales por la Freie Universität Berlin. Actualmente realiza estudios de posdoctorado y se desempeña como docente invitado en el Lateinamerika-Institut de esta misma universidad. Este ensayo se basa en "Viele Medien und nur eine Nachricht. Die Transformation des Mediensystems" (Manuel Silva-Ferrer y Silvia Cabrera), publicado en Andreas Boeckh, Friedrich Welsch y Nikolaus Werz (comps.): Venezuela Heute (Vervuert, 2011). Correo electrónico: msilvaferrer@googlegmail.com.

Philip Kitzberger

Politización del campo mediático y democracia en la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez

La Venezuela de Hugo Chávez forma parte de esas experiencias gubernamentales de la nueva izquierda latinoamericana

que han inaugurado un inusitado ciclo de politización en el que se rediscuten —no sin fuertes confrontaciones y controversias— estructura, roles, regulación y reforma legal democrática en el campo mediático.

Existen antecedentes de contrahegemonismo mediático e intentos reformistas —en respuesta al histórico dominio del comercialismo, del capital (extranjero), de las *oligarquías* o de la *derecha*— en las experiencias del populismo y la izquierda del siglo XX en América Latina. El cardenismo, el peronismo, la Revolución Nacional en Bolivia, el gobierno de Velasco Alvarado o el Chile de Allende, contienen ejemplos evocables de tales ofensivas.

Sin embargo, con el llamado *left turn* del período posneoliberal estas iniciativas contrahegemónicas cobrarán una centralidad política que parece ser función de una acrecentada —real o imaginada— relevancia política de los medios de comunicación.

Chávez ha sido, en cierto modo, quien ha inaugurado esta ola. Sus tácticas de confrontación pública con los medios parecen haber ampliado el muestrario de opciones políticas disponible ante los demás. No obstante, cada caso nacional presenta, visto de cerca, múltiples inflexiones que son función de determinados factores locales como la estructuración histórica de la relación política-medios.

En la esfera mediática el proceso de la Revolución Bolivariana se ha destacado por su radicalismo. En general, este carácter refundacionalista ha sido atribuido al colapso del sistema político venezolano y a la profundidad de la crisis de representación en la que se produjo el ascenso de Chávez. Análogamente, la clave explicativa del radicalismo mediático puede vincularse a los avatares de la credibilidad de las instituciones mediáticas. La actuación de los grandes medios televisivos y de prensa durante la crisis de abril de 2002 constituye una coyuntura crítica a partir

del cual se observan realineamientos y una movilización radical y novedosa respecto del patrón histórico de la relación política-medios.

Durante buena parte del siglo XX, la renta petrolera mantuvo al Estado como el principal actor en la economía venezolana. Por esta razón, las élites gobernantes dispusieron históricamente de un gran ascendente frente a los demás actores sociales. Más que en otros países de la región, ocupar el Estado significó siempre contar con los recursos para disciplinar y alinear actores sociales. En este marco funcionaron también las relaciones entre élites políticas y mediáticas durante la democracia surgida del Pacto de Punto Fijo. La alternativa entre cooptación e inviabilidad explica la estructuración de vínculos entre los editores de los principales periódicos y los liderazgos de AD y COPEI. En los casos en que el esquema de prosperidad a cambio de deferencia se rompió, la opción de los actores periodísticos no pasó por la oposición sino por la sedición, respondida desde el Estado, eventualmente, por medio de medidas coercitivas.

A partir de los años ochenta el impacto en la renta petrolera impuesto por las bajas e inestabilidad del crudo, alterarían el equilibrio entre élites políticas y mediáticas. La merma en la capacidad estatal afectó el prestigio del *establishment* político puntofijista. La subordinación deferente dio lugar a una actitud más autónoma y agresiva por parte de empresarios televisivos y editores periodísticos.

Dichos cambios en las relaciones de poder estuvieron a su vez condicionados por transformaciones del campo mediático. Desde 1959 se exiliaron en Venezuela un importante número de empresarios (la familia Cisneros entre ellos), técnicos y profesionales de la precoz televisión cubana. Éstos acrecentaron el desarrollo de una

industria que de por sí experimentó un auge regional en los setenta. Con la presidencia de Lusinchi se iniciaría un proceso de liberalización, concentración y expansión en el sector radiotelevisivo, en especial la industria televisiva, convertida en tercera en facturación en Latinoamérica durante los noventa. Sobre esas plataformas encontraría espacio un periodismo de imagen modernizada, convertido en arma político-corporativa controlada por estos nuevos grandes empresarios, entre los que destacarían el Grupo Cisneros (Venevisión) y el grupo Phelps/Granier (RCTV).

En especial después del Caracazo, en 1989, se generalizó en los medios una corrosiva crítica de la clase política que aportó a la disolución del sistema bipartidario. Los medios colaboraron así con el derrumbe de la democracia puntofijista y por ende, pese a no haberlo apoyado, con la victoria electoral de Chávez en 1998, el carismático *outsider* que había irrumpido a la escena pública con el levantamiento militar de 1992. Desde su llegada a la presidencia, Chávez sostuvo una relación confrontativa con medios y prensa, lejos, no obstante, de la radicalización posterior a la crisis del “paro cívico”, golpe y paro petrolero de 2002-2003.

La Constitución sancionada en 2000 supuso una reafirmación del rol del Estado como garante de derechos y amplió los mecanismos de democracia participativa sin abandonar, no obstante, la institucionalidad de la democracia representativa en lo sustancial. En el ámbito comunicativo, recogiendo debates reformistas en los que Venezuela tuvo cierto protagonismo en los setenta, amplió la definición de libertad de expresión y reconoció —sin afectar la legitimidad del lucro— al Estado y al sector privado no comercial como actores legítimos del espacio mediático. En consonancia, la Ley de Telecomunicaciones de 2001, en contraste con el avance estatal en

el sector de hidrocarburos, hacía importantes concesiones a los intereses del sector privado comercial en radio y telecomunicaciones, a la vez que dotaba de estatuto jurídico al sector comunitario.

Pero pulverizados los partidos, los medios privados se convirtieron en foro e imán de la oposición, exacerbando su rol político desde el mismo inicio de la presidencia de Chávez. Totalmente excluidos de la llegada al Estado desde el recambio del elenco político, y como parte de un clima general de polarización creciente, los grandes medios —alineados y abandonando progresivamente todo vestigio de autonomía periodística y de la lógica de la información— llegaron hasta el paroxismo con la actitud de anteponer sus agendas políticas, económicas y de clase. Los cinco principales canales de televisión y la mayoría de los diarios fueron confluyendo así en el objetivo de deslegitimar y destituir al gobierno. Embarcados en una agresiva campaña en la que no se ahorraron prácticas reñidas con los estándares periodísticos, polarizaron la relación con el gobierno iniciando una espiral confrontativa en la que el gobierno no dejó de redoblar apuestas.

A lo largo de esta primera etapa, los medios privados confrontados con el chavismo dominaban las ondas radioeléctricas y el espacio mediático en general. Carente de estrategia comunicacional, el gobierno apenas contaba con las débiles señales estatales de radio (RNV e YVKE) y televisión (VTV), de un trato más cordial por ciertos medios alternativos (la cadena cristiana Fe y Alegría y Catia TV), además del apoyo de unos pocos periódicos. Este escenario cambiaría radicalmente después de la crisis política de 2002-2003.

El núcleo conspirador comenzó a articularse a fines de 2001 con los líderes de la organización patronal (Fedecámaras),

sindicales (CTV), sectores militares, tecnócratas de PDVSA y un bloque coordinado de prominentes miembros del *establishment* mediático como Marcel Granier, Gustavo Cisneros, Guillermo Zuloaga (Globovisión) y Miguel Enrique Otero (director de *El Nacional*), además de presentadores y periodistas estrella como Rafael Poleo e Ibéyise Pacheco. Más allá de los llamamientos directos de los espacios editoriales, los canales pasaron a cubrir en forma continuada y exclusiva la huelga general y la movilización opositora de principios de abril, manipularon la información sobre abastecimiento y silenciaron completamente las voces del gobierno. El gobierno intentó contrarrestar esta cobertura invocando cadenas que fueron eludidas dividiendo la pantalla. El 11 de abril los canales transmitían las conferencias del núcleo golpista que pedía la renuncia al presidente, mientras —por medio de un montaje de edición deliberado— se mostraba a militantes chavistas disparando contra la multitud opositora. Por la noche los conspiradores lograron cortar la transmisión del canal estatal, único medio controlado entonces por el gobierno. En una operación comandada por Pedro Carmona desde las oficinas de Venevisión, Chávez fue detenido en la madrugada del 12 de abril. Los medios dieron a conocer su “renuncia” y, sin proceder a verificar la información, celebraron al nuevo gobierno. Al día siguiente, sin embargo, oficiales leales a Chávez retomaron el control de la situación, y sus partidarios, predominantemente de los barrios populares, se volcaron masivamente a la calle coordinados por algunos medios alternativos y por la incipiente telefonía celular. Repentinamente los medios produjeron un verdadero *apagón* informativo al poner en el aire deportes, telenovelas y dibujos animados en lugar de reportar los acontecimientos relevantes

que ocurrían en la calle y en los cuarteles. El día 14, resquebrajada la coalición golpista, luego de que grupos de medios comunitarios amparados por miembros de la guardia presidencial retomaron la transmisión del canal estatal, Chávez fue repuesto en el palacio de Miraflores.

La abierta opción insurreccional de los grandes medios en abril de 2002 marcó un punto de inflexión. El involucramiento expuesto de sus propietarios en la conspiración afectó significativamente la credibilidad pública de los medios privados. La brecha de confianza abrió el espacio político para una radicalización del contrahegemonismo mediático chavista modelada, en buena medida, en respuesta a la experiencia de desestabilización.

Algunas orientaciones preexistentes se institucionalizaron. Si bien comenzó en radio en 1999 y pasó a la televisión en 2000, *Aló presidente* se consolidó —más allá de su función como dispositivo de comunicación directa— como un espacio regular desde donde hacer pública la denuncia y deconstrucción de los medios en clave de sus intereses.

El gobierno no tuvo igual en cuanto a protagonismo estatal en la creación de medios. Además de relanzar las estaciones de radio y televisión preexistentes (RNV y VTV), la administración creó otros dos canales televisivos de amplia cobertura (ViveTv y Tves). La red de radio estatal se amplió considerablemente (existían 79 FM públicas en 2009), además de varias experiencias de prensa gráfica estatal. En consonancia con su visión geopolítica, el gobierno bolivariano es el principal sostén de Telesur, la red regional de noticias orientada a la integración y la guerra contra el dominio informativo regional de vehículos como CNN. Si bien se abrieron importantes espacios que incorporaron voces, agendas, contenidos y experiencias participativas, una parte importante de

estos espacios se alineó en el oficialismo arrastrado por el enfrentamiento polarizado con la oposición. Los medios comunitarios, por su lado, pasaron de la inexistencia legal en 1998 a detentar 243 concesiones de radio y 37 de televisión en 2009, además de contar con programas estatales de equipamiento y asistencia. Pese a estas importantes novedades en el paisaje mediático y al declive en el ritmo de concesiones a los actores comerciales, éstos siguen siendo mayoritarios en el éter en cuanto a vehículos, facturación y audiencia (un 90% de la tasa de encendido televisivo aproximadamente).

En 2004 se sancionó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte. Esta norma establece un marco de actuación de los concesionarios fuertemente orientado a la regulación de contenidos. Su disposición más polémica, el artículo 29, prevé severas sanciones para quienes “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; [...] a alteraciones del orden público [...]; al delito; sean discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa; [...] sean contrarios a la seguridad de la Nación”. Esta regulación de la libertad de expresión está motivada —explícitamente— en la memoria fresca de la incitación a la desobediencia, a la violencia y el golpismo mediático de 2002. Los críticos de la ley afirman que la ambigüedad en la definición de las sanciones y de las propias conductas interdictas deriva en niveles de discrecionalidad y arbitrariedad que, sumado al control de las agencias regulatorias por el Ejecutivo, promueve la (auto)censura y la disuasión en la emisión de información y opinión. Así, esta cuestión es una de las que más han erizado la relación del gobierno bolivariano con los organismos internacionales.

En 2007, el gobierno no renovó la licencia de RCTV, la red de televisión más antigua y la de mayor audiencia. Lo

mismo sucedió con otras 34 concesiones de radio y televisión. El oficialismo alegó incumplimientos e invocó su derecho como poder concedente de no renovar una licencia para utilizar canales radioeléctricos. La medida produjo protestas de organismos internacionales, gobiernos y ONG, así como desde algunas voces sociales y políticas hasta entonces cercanas. Muchas de estas voces críticas arguyeron que la justificación de la caducidad en el antecedente golpista no cuaja con la renovación de concesión a Venevisión, igualmente protagonista de 2002, producto de un pacto con Cisneros de retraer la movilización opositora de la pantalla a cambio de la subsistencia. Ante los ojos de muchos, apareció entonces como una retaliación política y una amenaza grave a la libertad de expresión. Por otra parte, de las manifestaciones que surgieron en respuesta a la medida emergió un movimiento estudiantil que jugaría, de ahí en más, un rol relevante en la reorganización de la oposición política.

Así, desde la oposición, la política de medios de Chávez se ha convertido en uno de los principales tópicos en la denuncia de la deriva autoritaria del régimen. En el otro extremo del polarizado espacio político venezolano, se lee el proceso en modo inverso. En el campo chavista, y en particular en sus sectores más radicalizados, el golpe mediático de 2002 es interpretado como un punto de inflexión que produjo reacciones en la conciencia de los oprimidos y motorizó un proceso de democratización sin precedente en un espacio históricamente dominado por los sectores sociales dominantes.

El caso de la salida del aire de RCTV y las otras no renovaciones reflejan las diferentes concepciones de la libertad de expresión y la democracia en cuestión. Muchas de las críticas se han centrado en el argumento según el cual el cierre de un

medio supone lisa y llanamente un silenciamiento y por lo tanto un injustificable cercenamiento a la libertad de expresión. Dicho razonamiento asume tácitamente que el espacio público es infinito y que el ejercicio del derecho a la expresión es no rivalizante o no escaso y que la no interferencia en la esfera privada es el pilar de la libertad de expresión. Pero como destaca Owen Fiss, en condiciones de amplias desigualdades de poder social, el ejercicio de la libertad de expresión que hace al proceso de autodeterminación política, puede requerir y justificar interferir el espacio de la autonomía privada. La cantidad de puntos de vista que pueden hacerse audibles en la esfera pública mediática –en especial, aunque no sólo, por la naturaleza del espectro radioeléctrico– es necesariamente limitada. El espacio mediático tiene una frontera de Pareto: llegado un punto, la inclusión de una nueva voz requiere la disminución de la capacidad de hacerse oír de otra. Que intervenga la política –y no el mero mercado– en la determinación y regulación de qué voces –rivales– pueden tener acceso al espacio mediático no parece ser objetable en sí.

La libertad política democrática y el espacio público mediático que requiere su ejercicio, puede requerir y justificar, entonces, la interferencia estatal sobre unos intereses privados que deben estar subordinados al imperativo de igualar el acceso de los ciudadanos a la información y la capacidad de individuos, identidades, e intereses colectivos relevantes para hacerse oír públicamente. Democratizar significa en este caso, desacoplar acceso, representación de voz y otras capacidades relativas al ejercicio de la libre expresión respecto de las asimetrías de poder económico, social y político.

Sin embargo, en Venezuela los resultados de la intervención política a favor de esfera pública más democrática se presen-

tan, hasta donde puede verse, ambivalentes. El protagonismo estatal ha abierto sin duda el espacio mediático a voces y expresiones alternativas a los contenidos dictados por lógicas comerciales, tanto por la gran multiplicación de medios comunitarios como por la aparición de espacios en la plétora de nuevos *outlets* público-estatales, entre los que cabe destacar la experiencia participativa de ViveTV. No obstante, estas alternativas no han logrado desplazar a los medios privados de la hegemonía sobre las audiencias masivas. En lo que hace al debate público, la fuerte polarización determina que una porción significativa de estos nuevos espacios sustraídos a la lógica comercial, termina siendo ocupada por voces oficialistas verticalizadas. El problema no es tanto su presencia –necesaria y justificada, por cierto– como el que la lógica binaria que entablan con la oposición (de los medios privados) empobrece las condiciones del debate democrático.

La dependencia directa y con pocas mediaciones de las autoridades regulatorias que deciden sobre licencias y contenidos respecto de un Ejecutivo inmerso en las descriptas ofensivas, ha suscitado, cuando menos, importantes dudas. Una legítima interferencia pública democratizadora debe tender a observar reglas distributivas de acceso mediático libres de toda sospecha de constituir mecanismos velados de retaliación o negociación política.

Philip Kitzberger es investigador del Conicet (Argentina) y profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Desde 2010 realiza estancias de investigación en el GIGA-ILAS de Hamburgo con una beca Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt. Correo electrónico: pkitzberger@utdt.edu.

Lisette González A.

La desigualdad en Venezuela, antes y después de la Revolución Bolivariana

Desde su irrupción en la escena política venezolana en las elecciones presidenciales de 1998, en su discurso, Hugo Rafael Chávez Frías ha intentado presentarse como una alternativa de cambio revolucionario. Si bien consta también de otros importantes elementos, desde nuestro punto de vista vale la pena resaltar que en su discurso aparecen como centrales dos elementos: 1) la ruptura con el orden social y político instaurado durante los 40 años previos del sistema democrático y, especialmente, con las élites “puntofijistas”; 2) la reivindicación de las demandas de participación e inclusión de los sectores vulnerables, tradicionalmente al margen tanto de los procesos de toma de decisiones como de la riqueza nacional producto de la explotación petrolera.

Ambas características de su discurso han presentado al gobierno revolucionario como el único que ha dado respuesta a las necesidades de los sectores populares, en contraposición a los gobiernos anteriores, supuestamente orientados a la oligarquía y ajenos a los problemas de la población pobre. Este ensayo se propone exponer las orientaciones de la política pública antes y después de la llegada al poder del presidente Chávez, para poder establecer si este gobierno ha generado cambios sustantivos en las condiciones sociales de la población venezolana y, por tanto, si ha tenido algún impacto en la desigualdad.

Breve recuento de la situación social antes de 1999

La caída de la dictadura en 1958 y el consiguiente pacto entre los principales

actores políticos (partidos, grupos empresariales, militares, la Iglesia católica) dio paso a un largo período de estabilidad en el que se observó por primera vez la alterabilidad en el poder. El régimen democrático contaba con aceptación en la población no sólo por haber garantizado el derecho al voto universal, también por las promesas de mejora social que formaban parte central de su oferta. Es por ello que la intervención del Estado venezolano en el área social no era un elemento accesorio, sino que formaba parte de la estrategia de consolidación del nuevo sistema político.

Los pilares de la acción social fueron las redes públicas de educación y salud. Desde fines de los cincuenta se amplía rápidamente la infraestructura en ambos sectores, con un efecto notable: la tasa de analfabetismo de la población venezolana mayor de 10 años pasó del 49% en 1950 al 6% por ciento en el año 2000, según los datos censales, mientras que la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 56 por mil nacidos vivos en 1959 a 19 por mil en el 2000, según las cifras oficiales.

Paralelamente a la inversión pública en fortalecer el capital humano, las políticas de control de precios, protección del empleo y subsidios indirectos posibilitaron el incremento del ingreso de los trabajadores, en un contexto de crecimiento económico basado en la exportación petrolera y los recursos que ésta aportaba para sostener el gasto público. Como resultado, la sociedad venezolana observó una creciente igualación de oportunidades y movilidad social ascendente que ha sido abundantemente descrita en la literatura.

En la década de los ochenta, la caída de los precios del petróleo y la crisis de la deuda externa significaron el fin de una época de superávit en las finanzas públicas. Si bien no se realiza un ajuste en el modelo económico vigente desde comien-

